

PROCEDIMIENTO : ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.
MATERIA : CUMPLIMIENTO CONTRATO E INDEMN PERJUICIOS.
DEMANDANTE : NELSON MALDONADO JARA.
DEMANDANTE : CATHERINE CASANOVA URRUTIA.
DEMANDANTE : RODRIGO BRAVO PONCE.
DEMANDANTE : VANESSA AGUILAR POVEA.
DEMANDADO : UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA S.A.
ROL : C-3.002-2018

Antofagasta, siete de agosto de dos mil veinte.

VISTO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que comparece Ramón Miranda Tapia, Abogado, en representación de Nelson Maldonado Jara, Catherine Casanova Urrutia, Rodrigo Bravo Ponce, y Vanessa Aguilar Povea, todos profesionales, domiciliados en esta ciudad, en Calle Arturo Prat N° 461, oficina 1.805, e interpone demanda en procedimiento ordinario de cumplimiento forzado de contrato e indemnización de perjuicios en contra de Universidad de Antofagasta S.A., persona jurídica, representada legalmente por don Luis Alberto Loyola Morales, ambos domiciliados en esta ciudad, Avenida Angamos N° 601.

En el mes de agosto de 2013, los actores recibieron una oferta por parte de la Universidad de Antofagasta, consistente en la realización de un magister en ciencias de la actividad física el cual comenzaba como diplomado, por el lapso de un año, y que sería conducente a un magíster en el 2° año, el que se dictaría los días sábados, cada 15 días a partir del 24 de agosto de dicho año, en la Universidad de Antofagasta.

Se les indicó que el cuerpo docente que participarían en el proyecto sería traído desde Santiago, clínica MEDS, y del extranjero, haciendo énfasis en que serían docentes de primer nivel, en el área del ejercicio y medicina deportiva.



El costo de dicho curso, sería la suma de \$2.340.000 anual, incluyendo el pago de la matrícula de \$140.000, debiendo pagarse el arancel en cuotas mensuales, mediante valores que fijaría la Universidad, pues se debía considerar que se traería personal docente del extranjero y con algunos se iba a requerir traducción simultánea.

El Equipo docente participaría en ambas fases, diplomado y magister, invitando a los postulantes, a tomar el curso completo.

El programa establecido para el diplomado en su primer semestre, contempló ciencias del entrenamiento deportivo, fisiología, bioquímica del ejercicio y metodología de la investigación; en su segundo semestre contemplaría evaluación fisiología bioquímica y kinésica del deportista, medicina deportiva, aplicaciones terapéuticas de la actividad física y bioestadística. Por su parte, el magíster en su tercer semestre contemplaría bases moleculares del ejercicio sobre la salud humana, lesiones deportivas más frecuentes, nuevos enfoques en prevención, diagnóstico y tratamiento, seminario de investigación en motricidad y nutrición.

La cronología programada para la realización del programa educacional ofrecido, aseguraba que comenzaría en el mes de agosto de 2013, y finalizaría en agosto de 2015.

Para efectos de atraer postulantes, se ofreció una amplia y atractiva gama de docentes, reconocidos nacionalmente en el área de especialización, como también a docentes del extranjero.

Catherine Casanova Urrutia.

Es kinesióloga, titulada en el año 2009, de la Universidad de Antofagasta. Ejerce libremente la profesión, obteniendo una renta mensual de \$600.000.- aproximadamente, suma de dinero que atendido sus responsabilidades económicas personales y con su familia, el alto costo de vida que existe



en la región, resultan insuficientes para cubrir sus necesidades, por lo que a fin de complementar su renta mientras obtenía su especialización, ha debido trabajar como ejecutiva de inversiones en el Banco de Crédito e Inversiones, optando por la realización del magister para dedicarse de lleno a su profesión, ampliar su horizonte profesional, y poder concretar diversas ofertas laborales que tienen como condicionante la especialización de sus estudios.

Durante la realización del curso, Catherine Casanova Urrutia recibió una carta oferta, en la cual se le ofrecía desempeñar el cargo de kinesióloga titular para una empresa particular, ofreciéndole una renta mensual de \$2.200.000, carta que especificaba como condición para optar al cargo, obtener el grado de magister en su área de especialización.

Es un hecho público y notorio que en un mercado laboral competitivo como lo es el área de la kinesiología, para un profesional que mejore sus conocimientos a través de la realización de un magister siempre tendrá mayores y mejores oportunidades frente a sus colegas competidores.

Catherine Casanova aprobó todas las etapas del programa educacional, realizando todas las evaluaciones y sometándose a extensas jornadas de estudio que finalizaron exitosamente. Finalmente, su tesis, ya terminada se denomina "Efectos de la cafeína sobre la capacidad de potencia de salto en jugadoras de fútbol amateur".

Rodrigo Bravo Ponce.

Es kinesiólogo, titulado en el año 2010 de la Universidad de Antofagasta, quien ejerce la profesión desde hace 8 años y actualmente trabaja en la Universidad Santo Tomás de esta ciudad, obteniendo una remuneración imponible de \$1.088.000.-

Rodrigo Bravo es docente de planta en la Facultad de Kinesiología, en la Universidad Santo Tomás de Antofagasta, que de acuerdo a la normativa y reglamentación interna de la



casa de estudios, la realización de un curso de especialización, como lo es el magister ofrecido por la demandada, le permitiría obtener un mejor cargo y un considerable aumento de su remuneración; este avance en su ámbito laboral, estaba condicionado a iniciar y aprobar una especialización a través de un magíster, por lo que en primer lugar, debía acreditar a su empleador el hecho de haber iniciado el curso, lo que le permitiría solicitar la jerarquización, y luego de aprobado, debía acreditar dicha circunstancia, de manera que la mejora en sus credenciales académicas, pasaron a ser condicionante para su estabilidad laboral, pues en virtud de su matrícula asumió un compromiso con su empleador, del cual depende su trabajo.

La jerarquización de un docente de la Universidad Santo Tomás se encuentra establecida en el decreto número 050/13, de dicha casa de estudios, artículo 17, el cual permite a un docente solicitar a su casa de estudios, la jerarquización como profesor instructor, pasando a ser un docente de planta, lo que implica una mejora en su cargo y título en la Universidad, luego esta mejora estaría condicionada a la acreditación de haber obtenido el magister, lo que le permitiría acceder a un incremento en su remuneración, la cual pasaría de \$1.088.000 a \$1.610.000.- mejoras que, por supuesto, estarían sujetas a la condición de aprobar el magister.

El artículo 43 del reglamento de la Universidad, establece que ningún académico podrá permanecer más de cinco años en la jerarquía de instructor desde el momento de su primera jerarquización y transcurrido ese plazo, el académico deberá ser promovido previa evaluación a la jerarquía inmediatamente superior, o perderá su condición académica de planta en la Universidad.



Rodrigo Bravo aprobó todas las etapas del programa educacional, realizando todas las evaluaciones y sometándose a extensas jornadas de estudio.

Dada la constante negativa de la demanda a cumplir con lo pactado, Rodrigo Bravo se vio en la obligación de asumir un nuevo magister, de similares características, denominado "Fundamentos para la enseñanza en ciencias de salud", el cual comenzó en abril de 2018, y finaliza en el año 2020. Por lo que la demanda debe asumir los perjuicios económicos causados.

Nelson Maldonado Jara.

Es kinesiólogo, titulado en el año 2004 de la Universidad de Los Lagos, Osorno, ejerce la profesión desde hace 15 años, y actualmente trabaja en la Universidad San Pablo de Arequipa, Perú, con una remuneración imponible de 250.000 soles, lo que en moneda chilena supera el millón de pesos.

En el caso de Maldonado Jara, la realización del diplomado y magíster le permitiría acceder a una mejor renta, pues una vez aprobado podría optar a ser docente investigador y entrenador deportivo con una mejora sustancial en su remuneración. Además, una vez finalizado su proceso de magister, se trasladaría a Alemania a fin de realizar un doctorado en la misma especialidad, meta que no podría cumplir sin la obtención del grado de magister.

Atendida la alta competencia en su campo profesional, Maldonado Jara ha debido trasladarse a Perú a fin de poder acceder a un mercado laboral que le permitiese subsistir, pero ello ha significado dejar toda su vida atrás en Chile.

Nelson Maldonado aprobó todas las etapas del programa educacional, realizando todas las evaluaciones y sometándose a extensas jornadas de estudio. Su tesis, ya terminada se denomina "ficha de cuantificación de las cargas externas e internas de las sesiones de entrenamiento en corredores de medio fondo de alto rendimiento con un programa online".



Vanessa Aguilar Povea.

Es Licenciada en Educación y Profesora de Educación Física y Salud titulada en el año 2012, de la Universidad de Atacama, quien ejerce su profesión desde hace 6 años, y actualmente trabaja en el Colegio Buen Pastor de Copiapó.

La realización del diplomado conducente a magíster le permitiría a Vanessa Aguilar acceder a una mejor remuneración, pues mantenía una oferta seria de trabajo en la Universidad de Atacama en la planta de docentes, mejora que está sujeta al requisito excluyente de contar con un grado de magister de su especialidad, ya que producto del nivel de dicha casa de estudios, siempre están en búsqueda de profesionales con especializaciones superiores.

Vanessa Aguilar aprobó todas las etapas del programa educacional, realizando todas las evaluaciones y sometándose a extensas jornadas de estudio. Su tesis, ya terminada se denomina "Importancia de niveles de actividad física y deporte en el rendimiento cognitivo de niños de 4 a 6 años en etapa preescolar".

Es un hecho de público conocimiento y que se encuentra respaldado por diversas publicaciones que la carrera de Kinesiología es una de las más sobresaturadas en el país, por lo cual para dichos profesionales se hace imperioso contar con cursos de especialización o estudios más avanzados para obtener una mejora en sus remuneraciones.

Las características del programa educacional, unido al conocido prestigio que mantiene la demandada a nivel regional como reconocida casa de estudios, terminó por convencer a los actores en aceptar su oferta y tomar el curso de diplomado conducente a magister.

En virtud del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre las partes, la demandada se obligó a proporcionar el servicio educacional prometido en el



contrato, esto es proporcionar el recinto físico para su realización, el cuerpo docente, evaluaciones, y posteriormente el título prometido, en este caso, el diplomado al finalizar el primer año y luego el magíster de la especialidad en ciencias de la actividad física.

Que, posteriormente y por imposición de la demandada, se les impuso la realización de ramos o asignaturas adicionales, durante el último semestre y cambiar el nombre del magíster en actividad física deporte y salud, con el fin de poder validarlo y acreditarlo dentro de la casa de estudios, dado que a la fecha, era imposible tenerlo por validado y acreditado en los términos que fueron originalmente ofrecidos a los demandantes.

La convención consistía en que por una parte la Universidad entregaría las herramientas necesarias para el estudio contratado por el estudiante, tales como la contratación de docentes, implementación de salas de clases, programación de evaluaciones y finalmente al aprobar los requisitos, la entrega del título que permita acreditar ante terceros, el hecho de haber obtenido el grado de magíster. Por su parte, el estudiante se obliga a pagar el importe por matrícula, mensualidad pactada, asistir a las clases programadas, y aprobar las evaluaciones.

De acuerdo con lo señalado por la doctrina y jurisprudencia, el contrato de prestación de servicios educativos es "Aquel mediante el cual una parte se obliga a prestar servicios educativos y la otra a remunerar la prestación de tales servicios de manera completa o parcial o mediante algún sistema de beca. Dichos servicios se otorgarán por el prestador de servicios educativos al alumno, quien podrá ser parte del contrato o beneficiario de este".

La prestación de servicios educativos consiste en la aplicación de un programa progresivo de enseñanza acorde con



los planes y programas de estudio oficial o propio de cada establecimiento y su proyecto educativo o en la malla curricular respectiva en el caso de instituciones de educación superior, en condiciones de seguridad y bienestar para los alumnos.

En cuanto a la legitimidad de la entidad educacional para realizar y otorgar el grado de magister: el DFL N°1 de fecha 03 de enero de 1981, en su artículo primero establece que: "La Universidad es una institución de educación superior, de investigación, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades del país, al más alto nivel de excelencia".

El artículo segundo del mismo cuerpo normativo establece que: "Corresponde a las Universidades: a) Promover la investigación, creación preservación y transmisión del saber universal y del cultivo de las artes y de las letras; b) Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país de acuerdo a los valores de su tradición histórica; c) Formar graduados y profesionales idóneos con la capacidad y conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas actividades; d) Otorgar grados académicos y títulos profesionales reconocidos por el Estado.".

El mismo cuerpo normativo en su artículo 9, establece que: "Corresponde exclusivamente las Universidades otorgar los grados académicos de licenciado, magíster y doctor. El grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una Universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento de una disciplina determinada. El grado de magíster es el que se otorga al alumno de una Universidad que ha aprobado un programa de estudios de profundización de una o más de las disciplinas de que se trate. Para optar al grado de magíster se requiere tener grado de licenciado o un título



profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado”

En todo contrato de prestación de servicios educacionales, los alumnos tendrán derecho a recibir de manera completa los servicios educacionales por los cuales han contratado, entre ellos, la realización de las actividades lectivas programadas al inicio del año escolar o académico de manera íntegra, asistir a todas las clases, hacer uso de los medios de apoyo técnico pedagógicos como bibliotecas, laboratorios, espacios e instalaciones deportivas. Siempre tendrán derecho a rendir las evaluaciones o exámenes necesarios para obtener la promoción de cursos o grados y obtener las certificaciones de sus estudios realizados, como también a concluir el año escolar o académico.

El alumno, asimismo, tendrá derecho a que una vez finalizadas las evaluaciones y aprobadas estas, se le otorgue el título o grado académico prometido por la entidad educacional el cual será prueba frente a terceros que aprobó y obtuvo el grado o calidad profesional señalada en dicho instrumento.

Por su parte, el prestador de servicios educacionales tendrá derecho al pago de los aranceles de matrícula y colegiaturas y al pago de otros ítems libremente acordados por las partes y para ello deberá otorgar todas y cada una de las facilidades necesarias para que el alumno o su apoderado designado pueda pagar el importe acordado.

En Chile, el principio orientador en el derecho privado es el deber que pesa sobre ambas partes de un contrato bilateral, de cumplir lo pactado, en la forma convenida, principio que se conoce como *pacta sunt servanda* –lo pactado obliga–, y está recogido en el artículo 1.545 del Código Civil, que prescribe: “Todo contrato legalmente celebrado es



una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".

El contrato de prestación de servicios educacionales es un contrato especial, que tiene un gran significado social, pues se relaciona con la formación de las personas, por lo que el estándar de las obligaciones que asume la institución educadora van más allá de proporcionar los conocimientos y la infraestructura adecuada para impartir una determinada carrera, sino que lo vinculan a obligaciones de rectitud y corrección en su actuar, debiendo entenderse comprendido, dentro del contrato suscrito y de los compromisos que asume una institución de educación superior, la obligación de que la carrera profesional o especialización impartida, en definitiva, habilite al alumno para ejercerla de manera que la ofrezca en el convencimiento, seguridad y certeza que el alumno obtendrá el título o grado ofrecido.

Uno de los primeros incumplimientos en que incurrió la demandada, es que durante el inicio del curso, se planteó a cada alumno una malla curricular, la cual establecía los ramos y asignaturas que debían cursar, sin embargo, la casa de estudios procedió en forma arbitraria a incluir asignaturas adicionales, lo que llevó a un incremento de las horas que cada alumno debía dedicar al curso, con el consecuencial perjuicio imprevisto que cada estudiante debió soportar. Esta imposición se realizó bajo la premisa que si no lo asumían simplemente no podría aprobar el magíster.

Asimismo, la Universidad se negó a recibir el pago de las mensualidades, no obstante, los actores en cada oportunidad que les era posible preguntaban cómo podían proceder al pago de la mensualidad, pues no era su intención que el no pago causara alguna consecuencia negativa en el proceso, no obstante, la Universidad se mantuvo en silencio respecto a los pagos; en algunas oportunidades rechazaban cualquier pago que



pretendieran realizar, y en otras oportunidades señalaba que "abonaran lo que quisieran". Esto trajo muchas dudas acerca de la seriedad que la casa de estudios otorgaba a dicho proyecto educacional, sin embargo, ya se encontraban cursando el diplomado y magister, por lo que no tuvieron otra opción que continuar confiando en la Universidad, y sus representantes, e insistir en el pago.

Aprobadas las asignaturas y en etapa de presentación de tesis, la demandada se ha negado sistemáticamente a cumplir sus obligaciones, en particular no ha realizado ninguna de las gestiones conducentes a obtener las acreditaciones tanto del diplomado como del magíster. Han sido innumerables los intentos y esfuerzos de los actores para exigir el cumplimiento por parte de la demandada sin obtener ningún resultado, y por el contrario, los demandantes han cumplido con todos los requerimientos curriculares, aprobando las asignaturas impuestas, tanto las acordadas como las extraordinarias y que fueron agregadas unilateralmente, para estar en posición de obtener el diplomado y la acreditación del magíster, a lo que se ha negado la demandada sin dar excusa valida que permita comprender los motivos del incumplimiento.

Los demandantes acudieron a las autoridades y departamentos de la Universidad, siendo derivados de un lugar a otro, sin obtener alguna solución para su reclamo. Producto de las quejas formales, la Universidad en el mes de marzo de 2018 inició una auditoría interna, y, a la fecha de presentación de la demanda no se ha entregado el resultado de la misma.

La institución educacional tenía la obligación de, una vez finalizadas las evaluaciones, y aprobadas las asignaturas impuestas, otorgar todas las facilidades necesarias para obtener la acreditación del diplomado y luego del magister.



Los demandantes fueron citados para el día 05 de enero de 2018, al departamento de la Universidad para realizar la inscripción del post grado, pero se enteraron que no podían realizar ninguna defensa de tesis porque no estaban en los registros de la Universidad de Antofagasta como alumnos regulares, es decir, para la autoridad de la demandada no existían como alumnos. Ante dicha situación exigieron una solución y que se respete el contrato de prestación de servicios educacionales, las condiciones del diplomado conducente a magister, en ciencias de la actividad física, conforme las condiciones que fueron ofertadas y publicitadas por la Universidad.

Toda esta situación, ha causado un grave perjuicio a los actores como profesionales en sus respectivos puestos de trabajo, dado que contaban con el postgrado, y al no obtenerlo resultaron afectados por pérdidas de trabajo.

En la especie concurren todos los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento forzado de contrato.

El artículo 1.545 del Código Civil establece que: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".

A su turno, el artículo 1.546 del mismo cuerpo legal prescribe que: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por lo tanto no solo obligan a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella".

En virtud del citado contrato de prestación de servicios educacionales, los actores se obligaron a lo siguiente: a) pagar el importe de la matrícula; b) pagar el importe prefijado por las partes para la realización del diplomado y magister; c) asistir a las clases en los horarios prefijados



por la Universidad; d) aprobar las evaluaciones realizadas por la entidad académica.

Por su parte, la demandada en virtud del contrato se obligó a las siguientes prestaciones: a) proporcionar un espacio físico en el cual realizar las clases y evaluaciones; b) proporcionar el cuerpo de docentes ofrecidos en la publicidad; c) impartir a través de los docentes los conocimientos ofrecidos en el magíster; d) respetar el cronograma de actividades, materias, cursos y realización de evaluaciones; e) revisión y evaluación de la tesis; f) proporcionar el título de diplomado y magister en la especialidad ofrecida.

Las obligaciones contractuales fueron incumplidas por la Universidad de Antofagasta, causando una serie de perjuicios a los actores, de manera que la demandada, ha incurrido en responsabilidad contractual, lo que les otorga legitimidad para accionar por indemnización de perjuicios.

En el caso de autos concurren todos y cada uno de los requisitos establecidos por la doctrina para que la demandada sea condenada al pago de las indemnizaciones.

Los perjuicios causados por el incumplimiento contractual de la demandada se han materializado tanto en lo patrimonial como psicológico. En lo patrimonial, han incurrido los actores en excesivos gastos en la adquisición de materiales de estudio, pasajes, fotocopias. Por otra parte, el plan de estudio ofrecido por la demandada permitiría a los demandantes acceder a mejores cargos de trabajo, lo que traería un aumento considerable en sus remuneraciones, beneficios que debieron haber comenzado a percibir a lo menos desde el año 2015, produciéndose un lucro cesante importante.

La esfera psicológica el daño causado ha sido importante, pues, los demandantes se han sometido a extensas discusiones con la demandada, a fin de exigirle el cumplimiento de la



obligación y que les permitiera finalizar el magister por el cual aprobaron todas las asignaturas.

La pérdida de una ganancia legítima que debieron haber obtenido desde el año 2015, consistente en la oportunidad real y concreta de optar a mejores cargos de trabajo, y remuneraciones, les ha traído una serie de conflictos personales y familiares, afectando no solo a los demandantes sino también a su grupo familiar más cercano.

El artículo 1.556 del Código Civil, establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante.

En materia contractual, la indemnización del daño moral es procedente, según acertadamente lo han señalado tanto doctrina como jurisprudencia.

Respecto del daño emergente, como se dijo, está constituido por los gastos de materiales de estudio, pasajes, entre otros, que si bien se encontraban justificados hasta el año 2015, luego de ello, los demandantes han debido incurrir en una serie de gastos adicionales y que no se habrían materializado de haber respetado la fecha de término original del programa.

El lucro cesante se ha originado desde el año 2015 hasta la fecha, el que constituye una inmensa pérdida patrimonial para todos los actores dado que, atendida la naturaleza del magíster ofrecido, este significa el perfeccionamiento de la carrera original de los demandantes.

Entre el incumplimiento y el daño debe existir una relación de causa a efecto. No cabe duda alguna que todos los daños demandados se han producido por la negligencia de la demandada en el cumplimiento de sus obligaciones, en particular el deber incumplido de otorgar las facilidades para que los demandantes se encuentren en situación de terminar el programa ofrecido y la obtención del magister.



En cuanto al requisito de la constitución de mora del deudor, ha de entenderse en virtud del artículo 1551 N° 3 del Código Civil, que el deudor es constituido en mora a través de la interpelación judicial o sea cuando es reconvenido judicialmente, lo que en la especie se realiza a través de la demanda.

El Artículo 1.489 del Código Civil contempla la condición resolutoria tacita que se encuentra en todos los contratos bilaterales por medio de la cual en caso de no cumplir por uno de los contratantes lo pactado, el contratante diligente podrá pedir a su arbitrio la resolución del contrato o el cumplimiento de este, con indemnización de perjuicios en ambos casos.

Solicita, como peticiones concretas respecto de cada uno de los demandantes, lo siguiente: a) declarara la existencia de la obligación de la demandada de proporcionar las facilidades necesarias para la finalización del curso y la obtención del título de magíster en ciencias de la actividad física, todo lo anterior, en los términos pactados en el contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre las partes; b) declarar el incumplimiento culpable de la parte demandada en la ejecución del contrato de prestación de servicios educacionales, ordenando la revisión y evaluación de la tesis de los demandantes por una comisión externa e imparcial, a su costa, y en definitiva la obligación de la demandada de otorgar el título de magíster en ciencias de la actividad física, ordenando que se cumpla sin más trámite dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia que acoja la demanda, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía, suscribiendo el Tribunal en su nombre y representación los instrumentos necesarios para dicho efecto; c) para el evento que sea imposible el cumplimiento de la obligación en los términos esgrimidos en forma precedente, se condene a la



demandada la realización de un curso de diplomado y magister de idénticas características y utilidad, a su costa, otorgando todas las facilidades para su desarrollo, así como la convalidación de los ramos y asignaturas ya aprobadas por los actores; d) para efectos de buena fe en el cumplimiento de los resultados de la eventual sentencia, solicita se condene a la demandada a que la evaluación de la tesis conducente al grado de magíster sea realizada por una comisión de estudios externa a la Universidad, a su costa, esto último dado que el proceso de evaluación de una tesis es un proceso subjetivo, y dejar al arbitrio de la demandada la evaluación del mismo, podría dar lugar a la reprobación sin justificación a fin de eludir el cumplimiento de la eventual sentencia que así lo ordene; e) la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos).-, por daño moral, en favor de cada uno de los demandantes, producto de las diversas dolencias psicológicas y emocionales que el actuar de la demandada ha ocasionado a los demandantes, o la suma que el Tribunal estime de justicia; f) que las sumas condenadas sean debidamente reajustadas, con los reajustes e intereses que correspondan desde que la sentencia cause ejecutoria; g) la condena en costas procesales y personales a la demandada.

Asimismo solicita, respecto de Catherine Casanova, el pago de la suma de \$57.600.000.-, a título de lucro cesante, por la pérdida real y efectiva de una legítima ganancia futura que pudo y debió haber ganado y obtenido desde el año 2015, época en que la demandada debió haber cumplido su obligación, y proporcionar a los actores las facilidades para la obtención del título de magíster a razón de \$1.200.000 mensuales, que constituye la ganancia mensual perdida desde el año 2015, o aquella que el Tribunal logre tener por acreditada en virtud de las probanzas rendidas.



Respecto de Rodrigo Bravo, el pago de la suma de \$80.000.000 a título de lucro cesante, por la pérdida real y efectiva de una legítima ganancia futura que pudo y debió haber ganado y obtenido desde el año 2015, época en que la demandada debió haber cumplido su obligación, y proporcionar a los demandantes las facilidades para la obtención del título de magíster a razón de \$ 590.000 mensuales, que constituye la ganancia mensual perdida desde el año 2015, o aquella que el Tribunal logre tener por acreditada en virtud de las probanzas rendidas.

Respecto de Nelson Maldonado Jara, el pago de la suma de \$70.000.000 a título de lucro cesante, por la pérdida real y efectiva de una legítima ganancia futura que pudo y debió haber ganado y obtenido desde el año 2015, época en que la demandada debió haber cumplido su obligación, y proporcionar a los demandantes las facilidades para la obtención del título de magíster a razón de \$ 740.000 mensuales, que constituye la ganancia mensual perdida desde el año 2015, o aquella que el Tribunal logre tener por acreditada en virtud de las probanzas rendidas.

Respecto de Vanessa Aguilar Povea, el pago de la suma de \$ 75.000.000 a título de lucro cesante, por la pérdida real y efectiva de una legítima ganancia futura que pudo y debió haber ganado y obtenido desde el año 2015, época en que la demandada debió haber cumplido su obligación, y proporcionar a los demandantes las facilidades para la obtención del título de magíster a razón de \$ 760.000 mensuales, que constituye la ganancia mensual perdida desde el año 2015.

SEGUNDO: Que comparece Fernando Fernández De la Cuadra, Abogado, en representación de la demandada, Universidad de Antofagasta, quien contesta la demanda, solicitando su rechazo íntegro con costas.



Niega los hechos señalados por la contraria de la forma en que han sido planteados, pesando sobre los demandantes la prueba de sus afirmaciones y el alcance de las mismas.

De conformidad a la regla de distribución de la carga probatoria de los artículos 1.698 y 2.314 del Código Civil, es la parte actora la que debe acreditar todos los elementos de la responsabilidad civil contractual perseguida.

No se presenta ninguno de los requisitos legales para que proceda la responsabilidad e indemnización exigida, esto es: a) un hecho generador por parte del deudor; b) la existencia de un daño sufrido por el acreedor; c) la existencia de un vínculo causal que una al hecho generador con el daño sufrido por el acreedor y d) la constitución en mora del deudor.

Opone excepción de contrato no cumplido.

El segundo semestre del año 2013, la Universidad de Antofagasta en conjunto con la Clínica MED, comenzaron a impartir un Diplomado conducente a un Magister en Ciencias en la Actividad Física. En dicho programa se inscribieron 25 estudiantes, los que posteriormente se redujeron a 13, entre los cuales se encuentran los demandantes.

La Universidad de Antofagasta dio fiel cumplimiento a todas las obligaciones que se pactaron en el ya enunciado "Contrato De Prestación De Servicios Educativos", esto es: a) la Universidad de Antofagasta procedió a inscribir a todos los alumnos, incluyendo a los demandantes, en el Programa de Diplomado conducente al Magister en Ciencias en la Actividad Física; b) la demandada proporcionó los espacios físicos (salas) para impartir el Programa en referencia; c) la Universidad de Antofagasta contrató los docentes para realizar las respectivas actividades curriculares conforme a la malla curricular del programa; d) los docentes realizaron las evaluaciones respectivas.



En lo que respecta a las obligaciones de los demandantes, estas no sólo se limitan al pago de los respectivos aranceles del programa del Diplomado y Magister, sino que además los estudiantes tienen la obligación de asistir a las actividades curriculares, realizar las pruebas, trabajos u otras evaluaciones que se hayan establecido en el programa y finalmente realizar las actividades de titulación y/o graduación, según sea el caso.

Los demandantes no han dado cumplimiento a una serie de obligaciones previstas en el "contrato de prestación de servicios educacionales".

Ninguno de los actores ha procedido al pago de los aranceles previstos en el diplomado conducente al magister, sino que sólo pagaron el arancel de inscripción. No es efectivo lo indicado por la contraria en cuanto a que la Universidad de Antofagasta no aceptó recibir el pago de los aranceles mensuales a que se encontraba obligado el estudiante.

Los demandantes han señalado en su libelo que habían terminado todas las actividades curriculares y sólo faltaba su tesis para obtener el grado académico de magister, cuestión que no es efectiva, pues, Vanessa Aguilar Povea tiene pendiente, entre sus actividades curriculares, la asignatura de "curso complementario 1 Psicología deportiva/trabajo", Catherine Casanova Urrutia tiene pendiente, entre sus actividades curriculares, las siguientes asignaturas: "Seminarios de Investigación en Ciencias del ejercicio" y "Bases Moleculares aplicadas al ejercicio y salud", Rodrigo Bravo Ponce tiene pendiente, entre sus actividades curriculares, la asignatura de "Curso complementario 1 Psicología deportiva/trabajo, y Nelson Maldonado Jara tiene pendiente las siguientes actividades curriculares: el curso de "Seminario de Investigación en



Ciencias del Ejercicio", "Bases Moleculares aplicadas al ejercicio y salud", "Curso complementario 1 Psicología deportiva/trabajo" y "Curso complementario 2 Fuentes de financiamiento".

Como todos los demandantes tienen actividades curriculares pendientes (asignaturas), evidentemente no pueden hacer entrega de tesis de grado, ya que es condición haber aprobado previamente las mismas.

En virtud de los referidos incumplimientos por parte de los actores, con relación al contrato celebrado, es que opone la excepción de contrato no cumplido, que se encuentra regulada en el artículo 1.552 del Código Civil, el cual expresa: "En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos".

La demandada niega que hubiere procedido a alterar unilateralmente las asignaturas previstas en el programa, asimismo, de manera alguna ha negado el pago de los aranceles, todo lo contrario, en reiteradas ocasiones solicitó a los estudiantes proceder a dar cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, cuestión que hasta la fecha no sucedió.

La no obtención del magister por parte de los estudiantes no tiene relación alguna con que la Universidad de Antofagasta no haya realizado las gestiones respectivas, ya que los estudiantes no han dado cumplimiento a todas las actividades curriculares previstas en el programa.

En razón de estos antecedentes, resulta improcedente exigir el cumplimiento forzado de alguna obligación por parte de la Universidad de Antofagasta, ya que ha dado cumplimiento a todas las obligaciones previstas en el contrato, cuestión que no sucede por parte de los demandantes.



Niega, controvierte y desconoce la existencia, entidad, naturaleza y monto de los daños reclamados, siendo la contraria quien debe acreditar los hechos en que se basa su demanda y la referida existencia, naturaleza y monto de los presuntos perjuicios.

Al no proceder el cumplimiento forzado de las obligaciones por parte de la Universidad de Antofagasta, resulta del todo improcedente la demanda de indemnización de perjuicio, todo lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 1.489 del Código Civil: "En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios".

El lucro cesante corresponde a una utilidad, provecho o beneficio que ordinaria y razonablemente habría obtenido la contratante víctima del incumplimiento, de no mediar este hecho.

Es requisito del lucro cesante que el daño sea cierto, esto es, que sea real y efectivo, tener una existencia, lo que implica rechazar la indemnización del daño eventual o meramente hipotético, es decir, de aquel que no se sabe si va a ocurrir o no, lo que no excluye la posibilidad de indemnización del daño futuro, del que no ha sucedido aún, con tal que no quepa duda que va a ocurrir. El lucro cesante exige certeza, siendo algo más que "la mera posibilidad de su ocurrencia" o bien "una mera expectativa".

La solicitud de indemnización por lucro cesante de la contraria carece de todo fundamento, por las siguientes razones: a) para exigir el pago de lucro cesante por los actores debe existir un daño cierto y concreto, es decir, ser real o efectivo, esto es, tener existencia. Los argumentos de



los cuatros actores sólo dicen relación con eventualidades, meras expectativas que no constituyen derecho, ya que no se sabe si ocurrirá o no; b) los demandantes no entregan antecedentes fidedignos y demostrables de las ganancias que dejaron de percibir. Los montos que exigen no se encuentran sujetos a ningún criterio objetivo, cuantificable, señalándose montos aleatorios sin respaldo alguno; c) no es posible alegar la pérdida de ganancias por los actores por no obtener el grado académico de Magister, si no han dado cumplimiento a todas las actividades curriculares del programa, hecho que no resulta imputable a la Universidad de Antofagasta, y d) en razón de todo lo anterior, no es posible la existencia de una ganancia real y cierta perdida por los demandantes, si no hay certeza que los mismos aprobarán todas las actividades académicas pendientes, entre las cuales se encuentra la tesis de grado.

Los demandantes fundamentan esta indemnización en la certeza que aprobarán las actividades curriculares pendientes en el Programa de Diplomado conducente a Magister, cuestión que es imposible de sostener previamente, pues, toda actividad curricular de una carrera de pregrado como postgrado se encuentra sujeto a una evaluación, la que pueda ser favorable o, en su caso, reprobada. Ante esta variable, resulta imposible sostener un daño por lucro cesante que debe ser indemnizado.

Respecto del daño moral, los actores no entregan detalle alguno de los padecimientos alegados, diagnósticos, entre otros. En otras palabras, su acción carece fundamentos plausibles. En todo caso, así como cualquier otro daño que se reclame, debe ser acreditado en juicio.

Por los antecedentes expuestos, solicita el rechazo de la demanda de cumplimiento forzado de obligación de hacer,



con indemnización de perjuicio deducida en contra de la Universidad de Antofagasta.

DEMANDA RECONVENCIONAL.

Comparece Fernando Fernández De la Cerda, Abogado, en representación de la Universidad de Antofagasta, ya individualizada, e interpone demanda reconvencional de cobro de pesos en contra de Catherine Casanova Urrutia, Rodrigo Bravo Ponce, Nelson Maldonado Jara y Vanessa Aguilar Povea, todos ya individualizados en autos.

Para efectos de economía procesal, reproduce todos los hechos expuestos en lo principal del escrito de contestación de demanda.

Los demandados adeudan a la Universidad de Antofagasta la matrícula y los aranceles del programa de Diplomado y Magister en Ciencias de la Actividad Física, cuyos valores son los siguientes: a) La matrícula anual correspondía a la suma de \$140.000.- y b) El arancel anual era de \$2.340.000.-.

Cada uno de los demandados reconvencionales adeuda a la Universidad de Antofagasta las siguientes sumas: la matrícula correspondiente al año 2013 y 2014, que equivale a la suma de \$280.000.- y los aranceles de matrícula del año 2013 y 2014, equivalente a \$4.680.000.- En total, cada uno adeuda a la Universidad de Antofagasta la suma de \$4.960.000.

El artículo 1.437 del Código Civil prescribe "Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia".



El artículo 1.548 del Código Civil dispone: "La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir".

El artículo 1.568 del Código Civil prescribe "El pago efectivo es la prestación de los que se debe".

Queda de manifiesto que los demandados reconvencionales adeudan a la Universidad de Antofagasta, las sumas precedentemente señaladas.

Solicita, se condene a de los demandados, esto es, a Catherine Casanova Urrutia, Rodrigo Bravo Ponce, Nelson Maldonado Jara y Vanessa Aguilar Povea, al pago en favor de la Universidad de Antofagasta de la suma de \$4.960.000.- respecto de cada uno.

TERCERO: Que, el apoderado de la parte demandante evacúa el trámite de la réplica y contesta demanda reconvencional.

Expone que, en la especie se reúnen todos y cada uno de los requisitos de la responsabilidad civil en materia contractual.

Respecto de la excepción de contrato no cumplido opuesta por la contraria, indica que es totalmente falso que no hayan cumplido sus obligaciones, ya que, si bien no han realizado el pago de los aranceles, ello se debe a las irregularidades en el cumplimiento del servicio contratado, de suerte que también opera a su favor la excepción de contrato no cumplido. Así, se pregunta, ¿cómo es posible exigir el pago de una obligación en circunstancias que no se ha entregado el servicio comprometido? Por otro lado, la demandada nunca permitió ni aceptó que se realizarán pagos por concepto de colegiatura.

Los demandantes sí han cursado y aprobado todas las asignaturas del programa; sin perjuicio de señalar que



siempre han estado llanos a cumplir con las exigencias académicas requeridas para finalizar el curso contratado y así obtener las certificaciones del caso. Que, si existen asignaturas pendientes de aprobación, ello jamás fue informado por la casa de estudios.

CONTESTACIÓN DEMANDA RECONVENCIONAL.

Que, comparece Ramón Miranda Tapia, Abogado, en representación de los demandados reconvencionales, Catherine Casanova Urrutia, Rodrigo Bravo Ponce, Nelson Maldonado Jara y Vanessa Aguilar Povea, y contesta demanda reconvencional, solicitando el rechazo de la misma en todas sus partes, con costas y, en subsidio de aquello, acoger la excepción de compensación hasta por los montos condenados, respecto de cualquier crédito que se declare en favor de los demandados reconvencionales en los presentes autos y cuya obligación de pago recaiga en la demandada y demandante reconvencional.

Cuestiona que, en la demanda reconvencional no se haga un relato acabado de cómo se habría generado esta rebeldía a pagar, y por qué ante esta rebeldía se continuó realizando un servicio, aunque negligentemente, pero prestado.

No se hace un detalle de en qué época se habría incumplido con el pago, cuáles fueron las gestiones de cobranza para constituir en mora al deudor y cuales habrían sido los motivos para no pagar la colegiatura.

Lo anterior, solo deja en evidencia que es la contraria quien no ha cumplido el contrato de prestación de servicios, y su negligencia alcanzó inclusive a las gestiones de cobro o recaudación.

La conducta de la Universidad a lo largo de la relación contractual, ha sido caracterizada por una marcada irresponsabilidad y desorden en lo administrativo.

La Universidad nunca estableció la modalidad de pago de los aranceles, fueron los demandados reconvencionales quienes



constantemente preguntaban cómo podían pagar la colegiatura o bajo qué modalidad, y las cuotas en que se pactaría el valor total.

La información siempre fue entregada de manera errática y desordenada, pues mientras algunas personas de la casa de estudios señalaban que debían esperar para realizar cualquier pago, otras señalaban que abonaran lo que quisieran, pero al intentar pagar no emitían ningún comprobante de pago, y tampoco informaban el valor que se debía pagar, generando una natural desconfianza en la persona que paga por el servicio. Finalmente, siempre fue la demandada quien se negó a recibir los pagos, entendiendo los demandados reconvencionales que esto se debía a los constantes incumplimientos en la prestación del servicio y que una vez que se superase el desorden podrían regularizar los pagos.

Que lo relatado jamás podría configurar un incumplimiento, pues los actores y demandados reconvencionales siempre estuvieron llanos a dar cumplimiento al pago de la colegiatura.

El artículo 1.552 del Código Civil, establece: "En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos".

La contraria al incumplir el contrato al no proporcionar el servicio pactado, incurriendo en atrasos en la prestación del servicio, generó como efecto, que los demandados reconvencionales no estuvieran obligados a dar cumplimiento a su obligación.

Al no exigirse ni permitirse el pago por parte de la casa de estudios, los actores principales jamás incurrieron en mora.



De esta forma opone a la demanda reconvencional, la excepción de contrato no cumplido, contemplada en el artículo 1.552 del Código Civil.

Cualquier obligación de pago que pudiese recaer en los demandados reconvencionales respecto de la colegiatura demandada, solo podrá hacerse efectiva una vez que la Universidad de Antofagasta cumpla íntegramente con su obligación de proporcionar el servicio educacional contratado hasta el íntegro término del mismo.

En el evento que sea acogida la demanda reconvencional y se declare que los demandados reconvencionales adeudan cualquier suma de dinero en favor de la demandante reconvencional, opone excepción de compensación legal de la deuda, solicitando que cualquier crédito a la que fuese condenada su parte deberá compensarse con cualquier crédito que el Tribunal declare en favor de los actores principales a través de la sentencia definitiva que se dicte en los presentes autos.

El artículo 1.655 del Código Civil expresa que: "Cuando dos personas son deudoras una de la otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas". A su vez el artículo 1.656 del mismo cuerpo legal, señala que: "La compensación opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores".

CUARTO: Que, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el trámite de la dúplica.

QUINTO: Que a objeto de acreditar sus pretensiones, la parte demandante allegó al proceso los siguientes elementos de convicción:

I.- DOCUMENTAL.



1. Cadena de correos electrónicos remitidos a la Universidad de Antofagasta durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018.

2. Constancia de fecha 15 de julio de 2014 emitido por la Universidad de Antofagasta respecto de Nelson Maldonado.

3. Constancia de fecha Abril de 2017 emitido por la Universidad de Antofagasta respecto de Nelson Maldonado.

4. Consolidado de notas modulo psicología.

5. Consolidado de notas del magister durante el periodo 2013.

6. Set de publicaciones de redes sociales emitidos por la Universidad de Antofagasta.

7. Recibo de dinero de fecha agosto de 2013 emitido por Universidad Antofagasta.

8. Constancia de fecha marzo de 2016 emitida por Universidad Antofagasta respecto de Vanessa Povea.

9. Formulario postulación magíster emitido por Universidad Antofagasta.

10. Correo electrónico de fecha 03 de marzo de 2016.

11. Ley Universitaria número 30.220 de la República de Perú.

12. Cadena de correos postulación cargo Vanessa Povea.

13. Cadena de correos postulación cargo Catherine Casanova.

14. Correo de fecha 10 de enero de 2019 de Nelson Maldonado.

15. Certificado emitido por Universidad Santo Tomas de fecha 10 de abril de 2018 respecto de Rodrigo Bravo.

16. Impresión de pantalla de página de internet de Perú con requisitos para trabajar en la especialidad de Nelson Maldonado.



17. Impresión de pantalla de página de internet de Perú con denegación de cargos sin post título para trabajar en la especialidad de Nelson Maldonado en Perú.

18. Nota de prensa Perú requisitos post título para trabajar en Perú.

19. Informe realidad laboral kinesiólogos en Chile 2019.

II.- TESTIMONIAL:

1. JEAN PAUL CASANOVA URRUTIA.

El testigo es hermano de la demandante, e indica que en el año 2013 Catherine le cuenta a la familia que cursará el diplomado conducente a magister con el fin de aumentar sus rentas, pidiéndole a la familia que la apoyaran en términos económicos.

Que, al cursar el diplomado conducente a magister, comienzan los problemas: primero, la malla fue variando constantemente, en donde fueron agregando ramos a la malla en la cual ella se había inscrito; segundo, continuamente los profesores hacían cambios de horarios, reprogramando sobre la marcha; tercero, en un momento su hermana les dejó de pedir dinero a su familia para pagar el curso, ya que la Universidad no le permitía pagar la mensualidad.

Que, en la Universidad dijeron a su hermana y a los demás actores que no iban a obtener el magister porque no había ningún tema administrativo que lo comprobara, porque no había pagos.

Que, su hermana estaba postulando a otros trabajos, señalando que estaba realizando este magister, por lo tanto las ofertas claras de trabajo no se pudieron concretar, porque era un pre requisito contar con un magister.

Que lo anterior le produjo un estrés y depresión.



Catherine Casanova no ha podido iniciar ningún otro magister o post grado, porque no cuenta con los recursos económicos para ello.

2. JORGE GERÓNIMO CAMPILLAY GUZMÁN.

El testigo, Director de la carrera de Kinesiología de la Universidad Santo Tomás de Antofagasta, afirma que conoce al demandante Rodrigo Bravo Ponce, desde marzo de 2011, año en que postuló entre una terna al cargo de jefe de carrera.

Que, en el cargo de la jefatura de carrera se deben comprometer actividades para mejorar la carrera académica, y es requisito mínimo la obtención del grado de magister, estos compromisos se gestionan a través de un sistema online y el empleado, en este caso Rodrigo, tiene el plazo de cinco años para la obtención del magister y la promoción al grado de profesor asistente. En el año 2013, Rodrigo ingresa los antecedentes del magister ofrecido por la Universidad de Antofagasta, dentro de sus compromisos de gestión, sin embargo, al año siguiente 2014, relata tener dificultades en el proceso final (tesis) de grado, en que la Universidad de Antofagasta, no da respuesta a sus inquietudes, y desconoce la posibilidad real de obtener el grado académico comprometido. Esto acarreó dos perjuicios; uno, el no poder acceder al grado académico de asistente, que lo privó de un aumento en su renta líquida, en un monto aproximado de \$500.000, mensuales; y lo segundo, al no poder cumplir sus compromisos de gestión, podría haber sido desvinculado del cargo, dado que eso es lo que contempla el reglamento de los académicos de la institución Santo Tomás. Dados los antecedentes presentados, y el incumplimiento de la Universidad de Antofagasta, la Universidad Santo Tomás, extendió una prórroga para la obtención del grado académico, debiendo Rodrigo matricularse en un nuevo programa de post grado, ofertado por la propia Universidad Santo Tomás para



todos los académicos que no hubieran podido acceder al grado de magister dentro de los cinco años iniciados de contrato.

Que, Rodrigo Bravo le ha comentado deficiencias en la comunicación, y faltas de respuestas a las inquietudes, en particular del proceso que estaba a punto de iniciar que era su proceso de tesis, habiéndosele ya designado profesor tutor, mismo que nunca respondió para sostener la primera reunión del proceso.

3. JONATHAN ANDRÉS GALLEGUILLOS LÓPEZ.

El testigo, compañero de magister de los actores, manifiesta que, una vez matriculados y a medida que se desarrollaba el curso, comenzaron a surgir problemas: así, les cambiaban la malla constantemente, también cambiaron el nombre al magister, que era la razón principal por la que estaban estudiando, queriendo quitar la palabra ciencia del título. Empezaron a ausentarse profesores, el magister se alargó más de lo normal, no se les permitía pagar, con la excusa que estaban regularizando todo, también hubo cambios en la jefatura del magister, casi llegando al final se les asignan profesores guías, los que nunca tomaron contacto para el proceso final. En una última instancia fueron varios compañeros a Tesorería de la Universidad de Antofagasta, para averiguar por qué no se efectuaban los cobros, donde se les dijo que el magister no existía.

No pudieron terminar el magister, el proceso final no se llevó a cabo, tampoco se les entregó los lineamientos para terminar el proceso, pese a aprobar todas las asignaturas.

III.- EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:

1. Malla curricular.

IV.- OFICIOS:

1. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE ANTOFAGASTA.

SEXTO: Que la parte demandada no rindió prueba en La causa.



SÉPTIMO: DEL OBJETO DE LA CONTROVERSIA. Que, del estudio de los libelos rectores, se colige que la discusión de la cuerda principal y reconvencional, radica en discernir existencia de obligaciones actualmente exigibles e incumplidas, en propósito de efectuar su reconocimiento y ordenar el cumplimiento forzado. Asimismo, será preciso constatar concurrencia de los presupuestos que hacen procedentes la indemnización de los perjuicios reclamados.

En particular, se trata de un contrato bilateral de prestación de servicios educacionales, del cual emanan obligaciones de dar y de hacer. Los actores acusan incumplimiento del establecimiento educacional, puesto que no se les ha otorgado el título académico ofrecido, pese a haber cumplido los requisitos estudiantiles pertinentes, lo que los habilita a exigir su cumplimiento específico; mientras que la demandada, amén de invocar la excepción de contrato no cumplido por vía de defensa, pretende se le reconozca derecho a percibir el precio del contrato, a través de la acción de cobro de pesos.

Con causa a los incumplimientos imputados, los actores pretenden indemnización de perjuicios por daño emergente, lucro cesante y daño moral, bajo régimen contractual.

Cabe prevenir que, en términos generales, no se discutió la existencia de un contrato de educación, sino el efectivo cumplimiento de las obligaciones de dicha convención, como de los perjuicios que surgen con motivo o a propósito del mentado incumplimiento, de modo que sobre la base de existencia, mutuamente reconocida de la fuente de la obligación, se enderezará esta sentencia.

OCTAVO: DE LOS HECHOS ACREDITADOS. Que, de las pruebas incorporadas al proceso, especialmente correos electrónicos remitidos a la Universidad de Antofagasta durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018; constancias de fecha 15



de julio de 2014, marzo de 2016, abril de 2017, emitidas por la Universidad de Antofagasta; consolidado de notas modulo psicología; consolidado de notas del magister periodo 2013; recibo de dinero, de fecha agosto de 2013; formulario postulación magister emitido por Universidad Antofagasta; correo electrónico de fecha 03 de marzo de 2016; Cadena de correos postulación; certificado emitido por Universidad Santo Tomas de fecha 10 de abril de 2018 y la declaración de los testigos Jean Casanova Urrutia, Jonathan Galleguillos López y Jorge Campillay Guzmán, es posible asentar la efectividad de los siguientes hechos relevantes para la resolución del pleito.

1.- En agosto de 2013, se celebró contrato de educación entre los demandantes, en calidad de alumnos, y la Universidad de Antofagasta, como institución docente, destinado a otorgar a los primeros, instrucción y docencia en un diplomado conducente al grado de magister en ciencias de la actividad física. La actividad académica tenía duración de 2 semestres para el diplomado y 2 semestres adicionales, para alcanzar el grado de magister, iniciándose el periodo lectivo, el día 24 de agosto de 2013, con clases presenciales los días sábado, de 9:00 a 17:00 horas, cada 15 días. A su vez, los alumnos se obligaron a pagar un derecho de matrícula por \$140.000 y un arancel anual por colegiatura de \$2.340.000.

En cuanto a la existencia del contrato y su contenido específico, si bien no se acompañó un instrumento escrito, no cabe duda que fue perfeccionado, puesto que así lo reconocen ambas partes en sus respectivos libelos. Luego, en cuanto al contenido específico del contrato, se estará al relato de demanda -no controvertido en forma expresa- como al folleto de publicidad del servicio educacional, cual expone en forma expresa las condiciones antes citadas y que en virtud a las



disposiciones aplicables de la ley N°19.496, constituye obligación de cumplir para las partes.

2.- Con motivo al contrato de educación, los demandantes tomaron cursos lectivos en la modalidad prevista, durante el periodo 2013-2014 y 2014-2015, proporcionando la Universidad la plataforma física y puso a disposición docentes para ello.

Lo anterior se establece en función al reconocimiento espontáneo que realizan los litigantes en sus libelos rectores. Así, los demandantes fundan el incumplimiento en sucesivos cambios en la malla propuesta, la negativa a recibir los pagos y en la omisión de gestiones destinadas a obtener la calidad de diplomados y el grado académico de magister, es decir, no hay imputación alguna en torno a la falta o ausencia de entrega de las actividades docentes programadas. En igual sentido, la demandada -en contestación- arguye haber dado cumplimiento a dichas prestaciones, sin que ello fuera controvertido en la etapa de réplica.

3.- Con fecha 12 de agosto de 2013, doña Catherine Casanova Urrutia, procedió a pagar derecho de matrícula, por la suma de \$140.000. Esto se acreditó mediante la copia del instrumento privado denominado "recibo de dinero de 12 de agosto de 2013".

NOVENO: EN CUANTO AL FONDO: Que, desde un plano general, expresa el Código de Bello que las obligaciones nacen ya del concurso real de voluntades de 2 o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasi contratos; a consecuencia de un hecho que ha causado injuria o daño a otra persona, como en los delitos o cuasidelitos; y ya por disposición de la ley (artículo 1437 del Código Civil).

Los derechos patrimoniales se dividen en reales y personales. Los primeros, son aquellos que atribuyen a su



titular un poder inmediato sobre la cosa, poder que, dentro de los márgenes fijados por la ley, pueden ser más amplio o menos amplio y que, en todo caso, es oponible a cualquier otra persona. A su vez, los personales también llamados de crédito o de obligación, es el que nace de una relación inmediata entre dos personas en virtud de la cual una de ellas (deudor) está en necesidad de cumplir una determinada prestación (dar, hacer o no hacer) en interés de otra (acreedor) facultada para exigir tal prestación.

El código Civil prescribe que los derechos personales o créditos, son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas (artículo 578).

DÉCIMO: Que la doctrina especializada reconoce el arbitrio de análisis, como acción de cumplimiento específico, más no de cumplimiento forzado, en propósito de evitar confusión sobre su naturaleza declarativa respecto a la fase de ejecución y también en función al propósito que persigue, que no es otro que obtener reconocimiento judicial de una obligación exigible que mantiene factibilidad actual de cumplimiento.

El reconocimiento positivo de la acción dimana de lo previsto en el artículo 578 del Código Civil, al prescribir que de los derechos personales nacen acciones personales, cuál constituye el derecho principal del acreedor frente al incumplimiento contractual, en función al principio *Pacta Sun Servanda*, recogido en el artículo 1545 del mismo cuerpo normativo y se refrenda en el artículo 1489 del mismo cuerpo legal.

La pretensión de cumplimiento puede ser de sustitución o reparación, según sea el interés de satisfacción originario del contratante afectado por el incumplimiento.



La acción de cumplimiento específico presupone únicamente la existencia de un vínculo obligatorio, la exigibilidad de la obligación y el respectivo incumplimiento atribuible al deudor, de modo que para que prospere, no es preciso acreditar daño, ni necesariamente culpa o dolo, pudiendo realizarse la imputación en forma objetiva. Incluso más, habida consideración a la regla del artículo 1698 del Código Civil, bastaría acreditar la existencia de la obligación, siendo de cargo del deudor justificar su extinción correlativa.

Finalmente, desde un punto de vista lógico, para que prospere la acción de cumplimiento específico, es necesario que la ejecución de la prestación sea, aun posible de practicar, caso en el cuál se dará curso y solución a las hipótesis de imposibilidad de prestación o que su cumplimiento actual presuponga un esfuerzo, gasto no razonable o excesivo.

UNDÉCIMO: Que, en el caso que nos ocupa, tenemos acreditación de un vínculo obligacional que emana de un contrato de educación universitaria, de modo que resulta relevante conocer su conceptualización y marco jurídico aplicable para dirimir la controversia.

DUODÉCIMO: Que, se ha definido el contrato de educación como "Un contrato bilateral, celebrado consensualmente, entre una institución de educación superior y el estudiante, su representante o su agente oficioso; mediante el cual la primera, se obliga a prestar los servicios académicos y de infraestructura ofrecidos para lograr la mayor formación profesional como valórica del alumno y, la segunda, a cursar el régimen académico en dicha en dicha institución, obligándose a suscribir la matrícula, pagar la matrícula y el arancel correspondiente al año académico oportunamente, y dando garantía de ello, mediante la suscripción de un título



de crédito" (El Contrato de Educación Superior en Chile. Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Nadia Pamela Sanhueza Pacheco).

El contrato de educación tiene una función principal, cuál es ser un instrumento de colaboración entre los hombres, que repercuta considerablemente en el desarrollo personal de los individuos y en su relación con la sociedad en la que se desenvuelven y una sub función que consiste justamente en la de educación.

Entre sus caracteres principales encontramos que es un contrato bilateral, conmutativo, oneroso, principal, consensual, innominado o atípico, de tracto sucesivo y de adhesión.

DÉCIMO TERCERO: Que, en función al principio de libertad contractual, la convención se rige por las estipulaciones en ella pactadas, no obstante por su naturaleza intrínseca y el objeto y función que abarca, se regula, en parte, por la ley N°19.496 sobre protección de los derechos del consumidor.

Así el artículo 2° de dicha preceptiva especial dispone lo siguiente:

"Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley:

d) Los contratos de educación de la enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria, sólo respecto del Párrafo 4° del Título II; de los Párrafos 1° y 2° del Título III; de los artículos 18, 24, 26, 27 y 39 C, y respecto de la facultad del o de los usuarios para recurrir ante los tribunales correspondientes, conforme a los procedimientos que esta ley establece, para hacer efectivos los derechos que dichos Párrafos y artículos les confieren.

No quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación o por las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época del ingreso a la carrera o



programa respectivo, los cuales no podrán ser alterados sustancialmente, en forma arbitraria, sin perjuicio de las obligaciones de dar fiel cumplimiento a los términos, condiciones y modalidades ofrecidas por las entidades de educación”.

El Párrafo 4° del Título II, se refiere a las normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión. Al respecto, dicha ley señala un conjunto de cláusulas que podrían ser impuestas por los proveedores en los contratos que los usuarios o consumidores deben suscribir para la obtención de los bienes o servicios de consumo y que, por presumirse abusivas, el legislador las ha sancionado con la ineficacia. Entre ellas, se contemplan en términos genéricos las cláusulas o estipulaciones que, en los contratos de adhesión, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivadas del contrato, atendiendo para ello a la finalidad del mismo y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen.

El Párrafo 1° Título III, contempla disposiciones especiales en materia de información y publicidad, regulando la información que se entrega en la propaganda que los proveedores efectúan acerca de las características o condiciones del servicio respectivo.

El Párrafo 2° Título III, establece disposiciones especiales relativas a las promociones y ofertas que suelen hacer los proveedores.

El artículo 18 sanciona como infracción a la LPC el cobro de precios superiores a los exhibidos, informados o publicitados.

El artículo 24 determina los montos de las multas aplicables en caso de infracciones a las disposiciones de la LPC.



El artículo 26 se refiere al plazo de prescripción para las acciones contravencionales y sanciones impuestas en el marco de la LPC.

El artículo 27 establece el reajuste de las restituciones pecuniarias a que dé lugar la aplicación de la LPC.

El artículo 39 C, hace aplicable algunas normas sobre cobranza extrajudicial.

DÉCIMO CUARTO: Que, el contrato de educación posee elementos de esencia, naturaleza y otros puramente accidentales y en función a ello, podemos identificar derechos y obligaciones que conllevan prestaciones de distinta naturaleza, a saber de dar y de hacer.

En términos generales del contrato de educación se observan los siguientes derechos y obligaciones.

1.- La institución de educación se obliga a cumplir con todo lo ofrecido tanto directamente, como en su publicidad o difusión, así como a las condiciones convenidas en el contrato y los documentos anexos a él. Este derecho implica que las condiciones del servicio educacional no pueden ser modificadas de modo arbitrario y unilateral por la entidad de educación.

2.- La institución se obliga a que el régimen disciplinario y de evaluación académica, sea aplicado de modo igualitario e imparcial para todos los estudiantes.

3.- la institución se obliga a aceptar la participación de los alumnos en las actividades académicas ofertadas.

4.- La institución se obliga a que el contenido de la publicidad que ofrece sea claro, verídico, no induzca a error ni confusión:

5.- La institución se obliga a aceptar el retracto del alumno.



6.- El Alumno asume el deber de cumplir las exigencias académicas y conductuales.

7.- El alumno se obliga a pagar oportunamente el valor de la prestación (matrícula, arancel y colegiatura).

8.- El alumno se obliga a acatar las sanciones impuestas en conformidad al reglamento interno estudiantil.

DÉCIMO QUINTO: Que, por integración, como elemento de la naturaleza de la ley N°19.496, quedan resguardados los derechos y obligaciones que dicen relación con la equidad en las estipulaciones e infracciones por cobros indebidos, quedando, en cambio, excluidos el derecho a recurrir conforme a las disposiciones de ese cuerpo normativo, con acciones tendientes a reclamar de la calidad de la educación o a las condiciones académicas vigentes.

En síntesis, el contrato de educación es consensual y rige la autonomía o libertad contractual, no obstante, en ciertos aspectos, le resultan aplicables las disposiciones de la ley N°19.496 sobre protección al consumidor que impone reglas o límites mínimos.

DÉCIMO SEXTO: Que, acreditada la existencia de un contrato de educación y sus estipulaciones principales y que por vía principal y reconvencional, sus partícipes pretenden cumplimiento específico de las obligaciones recíprocas, como en atención a las reglas que regulan la carga de prueba contenida en el artículo 1698 del Código Civil, tocaba a cada una de ellas, justificar el pago efectivo, es decir la satisfacción o cumplimiento de la prestación comprometida.

Las imputaciones descritas por los demandantes consisten en que la entidad educacional hizo cambios en la malla curricular, no aceptó el pago de matrícula y arancel y omitió conceder la calidad de diplomados y la esfera o condiciones necesarias para optar al grado de magister, pese a haber



cumplido todos los requisitos académicos originariamente ofertados.

A su vez, la demandada arguye que los alumnos incumplieron la obligación de pago de la matrícula y colegiatura y que algunos de los alumnos no hay cumplido los requisitos académicos del programa.

Por consecuencia, el desenlace de ambas acciones pasa por revisar el cumplimiento del estándar de acreditación debida, respecto de cada una de las prestaciones antes descritas.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de cambios unilaterales en la malla curricular, la prueba rendida impide arribar a dicha conclusión, máxime aun si la relación de hechos en ese capítulo, es general y ambigua, puesto que no reseña qué cambios se produjeron y en qué época, lo cual impide afinar mirada en búsqueda del reproche. Con todo, la abundante prueba documental rendida consistente en cadenas de correos electrónicos entre los alumnos y personeros de la Universidad, en colación a la deposición de testigos, igualmente impide alcanzar convicción sobre la materia, puesto que los correos, en su gran mayoría, solo tratan de cuestiones triviales de administración, más de ninguno de ellos se puede colegir las mentadas modificaciones ni su época. Luego, el testigo Casanova Urrutia, si bien señala que entre los problemas que pudo percibir en la relación entre su hermana y la Universidad está la constante variación de la malla y cambios de horarios, él no dio razón de sus dichos al no indicar qué ramos o cátedras fueron anexados o eliminados y ello naturalmente impide dar tribuna a sus asertos. Lo mismo sucede con el testigo Galleguillos López, ya que si bien insinúa cambios en la malla, estos no fueron detallados en su relato. Mientras que el testigo Campillay Guzmán, no hizo mención alguna sobre tal hecho.



En relación a la negativa o rechazo de la universidad a recibir el pago de la matrícula, arancel o colegiatura anual, la prueba rendida, igualmente, es insuficiente para establecer mora del acreedor, obrando en cambio indicios en el sentido contrario. En efecto, consta que con fecha 12 de agosto de 2013, doña Catherine Casanova Urrutia, procedió a pagar la matrícula de inscripción por un valor de \$140.000, lo que se acreditó mediante la copia del instrumento privado denominado "recibo de dinero de 12 de agosto de 2013". Ergo, si uno de los alumnos pudo pagar el mentado derecho, se desvirtúa la alegación genérica de no existir plataforma, oportunidad o vía y aceptación para desarrollar estos, de modo que, al menos, en este capítulo, no será posible dar valor o crédito a los dichos de los testigos quienes en forma general, vaga y ambigua refieren que la universidad se resistía a recibir los pagos comprometidos.

Abona esta tesis la naturaleza institucional pública de la Universidad demandada, pues de ello se presume estar dotada de instrumentos como cuentas bancarias que habilitan a ejecutar pagos voluntarios, caso en el cual, es el propio depositante o deudor quien tiene facultad de hacer la imputación respectiva en el comprobante de depósito, y, en cualquier caso, además, existió siempre disponible el mecanismo de pago por consignación, respecto del cual no hay prueba alguna de prolegómenos de ejecución.

En síntesis, no hay prueba eficiente que autorice a declarar que la Universidad, como acreedora, rechazó la convención de pago ni que los demandantes estuvieron llanos a practicarlo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, los actores aluden haber cumplido los requisitos académicos idóneos para obtener la calidad de diplomados y para postular al grado de magister comprometido. En este punto, si bien la Universidad alega que Vanessa



Aguilar Povea tiene pendiente la asignatura: "curso complementario 1 Psicología deportiva/trabajo"; Catherine Casanova Urrutia, las asignaturas: "Seminarios de Investigación en Ciencias del ejercicio" y "Bases Moleculares aplicadas al ejercicio y salud"; Rodrigo Bravo Ponce, la asignatura: "Curso complementario 1 Psicología deportiva/trabajo; y Nelson Maldonado Jara, el curso: "Seminario de Investigación en Ciencias del Ejercicio", "Bases Moleculares aplicadas al ejercicio y salud", "Curso complementario 1 Psicología deportiva/trabajo" y "Curso complementario 2 Fuentes de financiamiento", considerando que la misma Universidad estaba en posición jurídica y material de justificar la falta u omisión, con los instrumentos pertinentes como la exhibición de libros de asistencia o de notas, sin que se haya cumplido, solo cabe entender ello como no cierto y en contrario, por vía de presunción, concluir que los demandantes se encuentran en condición jurídica de optar al grado de magister, cuanto más, si existen certificados emitidos por la misma institución que dan cuenta que, al menos, los alumnos Vanessa Aguilar Povea y Nelson Maldonado Jara, habían cumplido todos sus requisitos curriculares para optar al grado académico de magister, lo que denota falta de seriedad y/o desorden para alzar el descargo.

Despejada reunión o concurso de los requisitos académicos por parte de los actores para estar en condición de diplomados y poder optar a la defensa del examen habilitante para alcanzar el grado de magister, correspondía a la demandada justificar cumplimiento eficaz y oportuno de aquellas gestiones, no obstante ello no se logró en decurso de proceso, en tanto la demandada no rindió prueba alguna. No bien, tampoco existe alegación alguna en contestación tendiente a ello, es decir, en afirmar que ha concedido a los alumnos la condición o certificación de estar diplomados y



que pueden acceder al examen para alcanzar el grado de magister y ello es suficiente para tener por establecido ese incumplimiento, consistente en no otorgar el fin práctico del contrato educacional pactado.

DÉCIMO NONO: Que, entonces, zanjado que ambos contratantes se encuentran en condición de incumplimiento de obligaciones desde una faz objetiva, puesto que la Universidad dejó de conceder las prestaciones prometidas en el contrato, que a la sazón, importan el fin práctico que motivó, presumiblemente, el negocio jurídico, como es la obtención de la condición de diplomado o de alumno con derecho a obtener el grado académico de magister, en contexto de total desconocimiento si ello es actualmente factible, puesto que no se puso en la esfera de conocimientos del Tribunal si la Universidad tiene habilitación institucional para conceder dichos reconocimientos; y, a su vez, que los alumnos dejaron de cumplir la obligación de pago del derecho de matrícula y arancel o colegiatura anual, es preciso resolver la controversia principal y reconvencional, en base a elementos de razonabilidad y con pleno ajuste al interés de ambos contratantes, manifestados en las acciones de cumplimiento específico vertidas consecuentemente.

VIGÉSIMO: Que, resulta conveniente prevenir que la demandada alegó excepción de contrato no cumplido, o, como se conoce en doctrina, excepción de inejecución, consistente en un remedio frente al incumplimiento que puede hacer valer el contratante a quien se le está exigiendo el cumplimiento de una obligación, cuando su contraparte no ha cumplido o está llana a hacerlo con su obligación correlativa, es decir en contexto de incumplimientos recíprocos de obligaciones que emanan de un contrato bilateral.

El fundamento de esta institución se encuentra, según la doctrina, ligada por una parte a la causa del contrato,



particularmente a la reciprocidad e interdependencia de las obligaciones nacidas de un contrato bilateral, conjuntamente con el principio de ejecución simultánea; y por otra en función al principio de buena fe contractual.

La doctrina y jurisprudencia nacional se encuentra dividida en torno a la recepción positiva de esta institución, puesto que algunos postulan está en la regla del artículo 1552 del Código Civil; mientras que otros sostienen que allí solo se consagra el principio de la purga de la mora, que solo tienen incidencia para los efectos de la acción indemnizatoria.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, soslayando la naturaleza y fundamento normativo de la excepción citada, es preciso señalar que su efecto primordial es consagrar la suspensión temporal de la exigibilidad del contrato, mientras pende el incumplimiento ajeno.

Luego, en el caso que nos ocupa, y en clave de "cumplimiento específico", asisten variados argumentos para rechazar su procedencia, en primer lugar y quizás el que goza de mayor fuerza de convicción, consiste en que por la naturaleza del contrato, su objeto y función específica, no hay interdependencia necesaria entre ambas obligaciones, puesto que la institución de educación, como se quiera, al haber brindado la plataforma y docentes tiene ya un crédito nacido, que la habilita para perseguir la prestación debida con plena indiferencia al cumplimiento de las obligaciones propias, lo que no ocurre en el caso contrario respecto de los alumnos, tanto más si se considera que se trata de un contrato de tracto sucesivo, en que parte de las prestaciones ya están cursadas. Lo anterior, obedece al necesario razonamiento de si es posible suspender la concesión de los grados académicos, o al menos la oportunidad de alcanzarlos, por la falta o ausencia de pago de aranceles debidos, lo que



nos conlleva a un problema sobre la entidad, naturaleza y equivalencia de los incumplimientos, que incluso puede tener un matiz de constitucionalidad, atendida la naturaleza del objeto de la prestación debida, a saber: estudios universitarios. A la postre, la conclusión necesaria parece ser negativa, puesto que la entidad de los incumplimientos y su interdependencia recíproca, no autorizan afirmar la necesidad de suspender indefinidamente los efectos del contrato mientras pende el cumplimiento ajeno, siendo que es factible declararlos recíprocamente exigibles.

Tributa lo expuesto que ambas partes manifestaron interés práctico en perseverar en el contrato y en su cumplimiento eficaz, en tanto impetraron por cuerdas separadas acciones destinadas a alcanzar su cumplimiento específico, de modo que la razonabilidad de la decisión merece ajustarse al deseo de los interesados.

Finalmente, el soporte positivo de esta decisión descansa en que el artículo 1552 del Código Civil, refrenda que ninguno de los contratantes se encuentra en mora mientras el otro no cumple con su parte o no se allana a cumplir lo debido, de forma tal que, en cualquier caso, el incumplimiento objetivo de la obligación tiene incidencia para los efectos indemnizatorios más no en lo relativo al ejercicio de cumplimiento específico de la obligación.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a la luz de lo reseñado en motivos anteriores, cabe expresar que aun existiendo incumplimiento recíproco de obligaciones, no es posible admitir suspensión de sus efectos, por la falta de interdependencia necesaria entre ellas, lo que, luego, no obsta a acoger ambas pretensiones, reconociendo que hay obligaciones exigibles pendientes y ordenando su cumplimiento incluso forzado por vía de apremio en la etapa procesal pertinente.



VIGÉSIMO TERCERO: Que, si bien el incumplimiento objetivo de los alumnos no constituye óbice para acceder a su pretensión de cumplimiento específico, este sí posee relevancia o influencia en lo pertinente a la acción indemnizatoria conexas, por el efecto purgatorio sobre uno de sus requisitos de la indemnización, como bien se observa del artículo 1557, al establecer que se debe indemnización de perjuicios, desde que el deudor se ha constituido en mora.

En base a este reconocimiento, cabe sino rechazar íntegramente el arbitrio indemnizatorio intentado, aun sin análisis de sus fundamentos ni de la prueba rendida, ya que ello resulta innecesario a la luz de lo dirimido.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, corolario al conjunto de micro decisiones anteriores, es que se acogerá la acción de cumplimiento específico intentada por cuerda principal, declarando que la Universidad ha incumplido el contrato celebrado, en tanto, omitió entregar a los alumnos la condición de diplomados y de otorgarles reconocimiento en calidad de candidatos al grado de magister y oportunidad para defenderlo, condenándola a su cumplimiento eficaz. Correlativamente se acogerá la demanda reconvencional, declarando que los alumnos han incumplido la obligación de pagar el arancel de matrícula y colegiatura, y ordenando su pago íntegro, con sola excepción de doña Catherine Casanova Urrutia, a quien solo se le condenará al pago de la colegiatura anual.

VIGÉSIMO QUINTO: EN CUANTO A LAS COSTAS. Que, atendida que ninguna de las partes resulta plenamente vencidas, se les eximirá del pago de costas.

En consecuencia, en mérito de lo precedentemente expuesto, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1.437, 1.489, 1.545, 1.547, 1552, 1553, 1.556, 1.567, 1.698



del Código Civil, 144, 160, 170, 254, 314, 346 N°3, 384 y 426 del Código de Procedimiento Civil; resuelve que:

I.- Se acoge demanda de cumplimiento específico de contrato, interpuesta por don Ramón Miranda Tapia, Abogado, en representación de Catherine Casanova Urrutia, Rodrigo Bravo Ponce, Nelson Maldonado Jara, y Vanessa Aguilar Povea, en contra de la Universidad de Antofagasta, solo en cuanto se condena a la demandada a reconocer, formalmente, a los demandantes, a través de un instrumento oficial, la calidad de diplomados en ciencias de la actividad física o similar y de candidatos al magister con idéntica mención o similar, concediendo oportunidad e instancias administrativas para su consecución definitiva, en función a los reglamentos internos de la institución.

II.- Se rechaza, en todo lo restante, la demanda impetrada por don Ramón Miranda Tapia, Abogado, en representación de Catherine Casanova Urrutia, Rodrigo Bravo Ponce, Nelson Maldonado Jara, y Vanessa Aguilar Povea, en contra de la Universidad de Antofagasta.

III.- Se acoge demanda reconvencional de cobro de pesos incoada por don Fernando Fernández De la Cerda, Abogado, en representación de la Universidad de Antofagasta, en contra de los demandantes, a quienes se condena a pagar los siguientes valores:

- 1.- Catherine Casanova Urrutia, la suma de \$4.680.000.
- 2.- Rodrigo Bravo Ponce, la suma de \$4.820.000.
- 3.- Nelson Maldonado Jara, la suma de \$4.820.000.
- 4.- Vanessa Aguilar Povea, la suma de \$4.820.000.

IV.- Que, cada parte deberá asumir las costas que el proceso les irrogó.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Ro1 N° 3.002-2018



Sentencia pronunciada por don Jordan Campillay
Fernández, Juez Titular.

En Antofagasta, a siete de agosto de dos mil veinte, se
notifica por estado diario sentencia precedente.

